



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

INFORME SECRETARIAL

Barranquilla, 10/07/2020

Radicado	08-001-33-33-014-2017-00669-00
Medio de control o Acción	Reparación Directa
Demandante	JAIME ALBERTO DAVILA SUAREZ
Demandado	NACION-MINDEFENSA-POLICIA NACIONAL
Juez	Guillermo Osorio Afanador

INFORME
Señor juez, paso a su despacho el expediente de la referencia, informándole que la apoderada de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS allegó a este Juzgado el contrato de transacción suscrito entre las partes y solicita se apruebe la misma y se dé por terminado el proceso.

PASA AL DESPACHO
Para decidir sobre la terminación del proceso por transacción

CONSTANCIA
Expediente con 162 folios. Memorial de fecha de marzo de 2020 por el cual se anexa contrato de transacción a folio 149.

ALBERTO OYAGA LARIOS
SECRETARIO

Ultimo Folio Digitalizado y número de cuaderno	Firma de Revisado



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, diez (10) de julio de dos mil veinte (2020).

Radicado	08-001-33-33-014-2017-00669-00
Medio de control o Acción	Reparación Directa
Demandante	JAIME ALBERTO DAVILA SUAREZ
Demandado	NACION-MINDEFENSA-POLICIA NACIONAL
Juez(a)	Guillermo Osorio Afanador

CONSIDERACIONES

Visto el informe secretarial que antecede, en efecto se observa el memorial presentado por la apoderada judicial de La Previsora S.A., Compañía de Seguros, llamado en garantía dentro de este proceso, a través del cual aporta el contrato de transacción suscrito entre las partes, en el cual se pactó el pago indemnizatorio por los perjuicios causados; solicita la aprobación de la misma y la consecuente terminación del proceso.

Procede a continuación el Despacho a resolver la referida solicitud, previo el recuento de los siguientes antecedentes:

El señor Jaime Dávila Suarez, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de Reparación Directa, contemplado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, pretendiendo se declare administrativamente responsable a la demandada por los daños ocasionados a su vehículo de placas UYW 937, producto del accidente de tránsito ocurrido el 06 de febrero de 2017 en la calle 96 A con carrera 49 C de esta ciudad.

Presentada el 05 de diciembre de 2017, la demanda fue admitida mediante auto de fecha 8 de mayo de 2018 (fl.35), siendo notificada en debida forma las entidades demandada, así como el Ministerio Público y la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (fl.37 a 42), corriéndose los 25 días de termino común, así como el traslado de los 30 días dispuesto en el artículo 172 del C.P.A.C.A.

La entidad demandada el día 16 de julio de 2018, dio contestación a la demanda oponiéndose a las pretensiones y en escrito presentado el mismo día manifestó llamar en garantía a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, el cual fue aceptado mediante auto del 20 de septiembre de 2018, ordenando la notificación de la llamada y se corrió el traslado de que trata el artículo 66 de Código General del Proceso y se suspendió hasta cuando venciera el término para que compareciera el llamado en garantía, sin exceder de seis (6) meses.

La Previsora S.A. Compañía de Seguros, contestó el llamamiento en garantía en forma extemporánea (fls. 73 al 108), circunstancia que fue advertida en el auto del 06 de agosto de 2019 (fl. 109 y 110), que además señaló fecha para realizar la audiencia inicial.

En la fecha y hora señalada y en Acta N° 263 /2019¹, quedó consignada al audiencia inicial, en la cual se saneó el proceso de una advertida irregularidad procesal al no haberse dado el traslado de las excepciones; fue fijado el litigio; en la fase de conciliación la llamada en garantía formuló una propuesta conciliatoria de la cual se dio traslado a los demás sujetos

¹ Folios 113 al 115., DVD a folio 129 del expediente.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

procesales, siendo aceptada por la parte demandante, sin embargo al advertirse la ausencia de algunos documentos necesarios para su aprobación, se continuó con las demás fases de la audiencia, decretando pruebas y se fijó fecha y hora la realizar la audiencia de pruebas.

El día 9 de diciembre de 2019², se dispuso el Despacho a la realización de la audiencia de pruebas, pero en la fase de saneamiento las partes y la aseguradora llamada en garantía, manifestaron haber llegado a un acuerdo el cual quedó plasmado en un contrato de transacción que presentarían próximamente al Despacho, ante lo cual se dispuso suspender la audiencia de pruebas.

En efecto el día 03 de marzo del presente año 2020, la apoderada de **La Previsora S.A. Compañía de Seguros**, allegó contrato de transacción contenido en tres (3) folios³, y como consecuencia solicita del Despacho su aprobación y se dé por terminado el proceso.

Se anticipa el Despacho a señalar que accederá a la solicitud de terminación del proceso por transacción celebrada entre las partes, por los motivos que pasan a exponerse:

- Requisitos para la aprobación de los Contratos de Transacción.

El artículo 2469 del Código Civil, define la transacción en los siguientes términos: “[/]la transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”, siendo así, si quienes tienen desacuerdos sometidos al arbitrio judicis llegan a alguna concertación, lo lógico es que la pongan en conocimiento del funcionario, con el fin de que lo convalide en lo pertinente, siempre y cuando las pretensiones objeto de la misma sean por su naturaleza conciliables, por consiguiente puede afirmarse que serían transigibles los conflictos ventilables a través de las acciones de nulidad y restablecimiento, reparación directa y contractuales, tal como sucede con la conciliación.

Es importante precisar que, no son susceptible de transacción las acciones públicas tales como la anulación, las electorales y las de rango constitucional, puesto que los derechos discutidos no tienen el carácter de renunciables por estar precisamente en juego los intereses generales de la legalidad y la defensa de los derechos fundamentales y los derechos e intereses colectivos, no susceptible de convenio entre las partes.

El artículo 176 de la Ley 1437 de 2011, en relación al allanamiento a la demanda y transacción, dispone:

“Art. 176. - Cuando la pretensión comprenda aspectos que por su naturaleza son conciliables, para allanarse a la demanda la Nación requerirá autorización del Gobierno Nacional y las demás entidades públicas requerirán previa autorización expresa escrita del ministro, jefe de departamento administrativo, gobernador o alcalde o de la autoridad que las represente o a cuyo despacho estén vinculadas o adscritas. En los casos de órganos u organismos autónomos e independientes, tal autorización deberá expedirla el servidor de mayor jerarquía de la entidad.

En el evento de allanamiento se dictará inmediatamente sentencia. Sin embargo, el juez podrá rechazar el allanamiento y decretar pruebas de oficio cuando advierta fraude o colusión, o lo pida un tercero que intervenga en el proceso.

² Acta a folios 146 y 147, DVD a folio 148 del Exp.

³ folios 150 al 154 del exp.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Con las mismas formalidades anteriores podrá terminar el proceso por transacción.”

Como es de apreciarse, la norma arriba citada no reglamenta de manera completa el tema de la transacción, remitiéndose así al estatuto procesal civil, en el que se regula la oportunidad y el trámite para terminar el proceso por transacción.

El artículo 312 del C.G del P., al que nos remitimos por disposición expresa del artículo 306 de la ley 1437 de 2011, preceptúa:

Artículo 312. Trámite. En cualquier estado del proceso podrán las partes transigir la litis. También podrán transigir las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia.

Para que la transacción produzca efectos procesales deberá solicitarse por quienes la hayan celebrado, dirigida al juez o tribunal que conozca del proceso o de la respectiva actuación posterior a este, según fuere el caso, precisando sus alcances o acompañando el documento que la contenga. Dicha solicitud podrá presentarla también cualquiera de las partes, acompañando el documento de transacción; en este caso se dará traslado del escrito a las otras partes por tres (3) días.

El juez aceptará la transacción que se ajuste al derecho sustancial y declarará terminado el proceso, si se celebró por todas las partes y versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas o sobre las condenas impuestas en la sentencia. Si la transacción solo recae sobre parte del litigio o de la actuación posterior a la sentencia, el proceso o la actuación posterior a este continuará respecto de las personas o los aspectos no comprendidos en aquella, lo cual deberá precisar el juez en el auto que admita la transacción. El auto que resuelva sobre la transacción parcial es apelable en el efecto diferido, y el que resuelva sobre la transacción total lo será en el efecto suspensivo.

Cuando el proceso termine por transacción o esta sea parcial, no habrá lugar a costas, salvo que las partes convengan otra cosa.

Si la transacción requiere licencia y aprobación judicial, el mismo juez que conoce del proceso resolverá sobre estas; si para ello se requieren pruebas que no obren en el expediente, el juez las decretará de oficio o a solicitud de parte y para practicarlas señalará fecha y hora para audiencia.

La transacción está contemplada en el Código General del Proceso como una de las formas de terminación anormal del proceso, lo que ocurre cuando el acuerdo envuelve en su integridad la cuestión debatida, sin embargo esto no obsta para que se admita su procedencia cuando recae sobre una parte del pleito o se relaciona con cuestiones posteriores al fallo que lo defina.

Para que se den los efectos procesales pretendidos por los concordantes, la solicitud de aprobación debe ser formulada al funcionario que esté conociendo el asunto, ya sea para tenerlo por culminado o para delimitar la incidencia que esa convención tiene, en lo que es de su competencia, determinando qué puntos quedan superados y cuáles siguen pendientes de resolver.

El Consejo de Estado al decidir sobre la solicitud de terminación del proceso por la celebración de un contrato de transacción entre las partes, luego de hacer un recuento normativo y jurisprudencial sobre la materia, a manera de conclusión, señala:



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

“En ese orden, de las definiciones legales y jurisprudenciales expuestas en la jurisprudencia en comento se extraen tres elementos que caracterizan a la transacción: (i) la existencia de un derecho dudoso o de una relación jurídica incierta, aunque no esté en litigio; (ii) la voluntad o intención de las partes de mudar la relación jurídica dudosa por otra relación cierta y firme, y (iii) la eliminación convencional de la incertidumbre mediante concesiones recíprocas. Esos elementos deberán acompañarse del cumplimiento de las siguientes exigencias: (i) la observancia de los requisitos legales para la existencia y validez de los contratos; (ii) recaer sobre derechos de los cuales puedan disponer las partes, y (iii) tener capacidad, en el caso de los particulares, y competencia, en el evento de entidades públicas, para vincularse jurídicamente a través de un contrato de esa naturaleza.”⁴

En consecuencia, procederá el Despacho a determinar si en el caso concreto se cumplieron con todos los requisitos jurisprudenciales y legales para la procedencia de la transacción como medio de terminación anormal del proceso.

Caso Concreto

Tal como se menciona en líneas anteriores, la apoderada de La Previsora S.A. Compañía de Seguros, con memorial calendado el 03 de marzo de 2020⁵, anexa el contrato de transacción en el que, por una parte el señor Joan Sebastián Hernández Ordoñez, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.014.214.701, en su calidad de representante legal de **La Previsora S.A. Compañía de Seguros**, por otra el abogado Alexander Gey Vilorio Sánchez, identificado con la C.C. No. 10.820.282 y T.P. No. 169.376 del C.S. de la J., actuando en calidad de apoderado de la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional-, quienes para efectos del contrato se denominan los indemnizantes y por otra parte los señores Jaime Alberto Dávila Suárez identificado con la C.C. No. 8.696.504, que para efectos del contrato se denomina el indemnizado, y Juan Manuel Dávila Suárez, actuando como apoderado judicial del anteriormente mencionado, con C.C. No. 3.744.758 y tarjeta profesional 168.179 del C.S. de la J.

En el mencionado contrato de Transacción suscrito por las partes se estableció:

“PRIMERA: OBJETO DE ESTE CONTRATO. *El presente contrato de transacción tiene por finalidad dar por terminado en los términos de los artículos 2469 del Código Civil y artículo 312 del Código General del Proceso, todos los litigios en contra de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS y de LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICIA NACIONAL, derivados del accidente de tránsito ocurrido el día 6 de febrero de 2017, en el cual se vieron involucrados el vehículo de propiedad de la Policía Nacional identificado con placas KGG-684 y el vehículo automotor de servicio público identificado con placas UYM-937 de propiedad del señor Jaime Alberto Dávila Suarez, quien manifiesta que producto de la colisión, su vehículo sufrió daños materiales.*

⁴ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION B Consejero ponente: RAMIRO DE JESUS PAZOS GUERRERO, auto del 28 de mayo de 2015, Radicación número: 05001-23-31-000-2000-04681-01(26137) Actor: COMUNIDAD DEL BUEN PASTOR Demandado: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Referencia: ACCION DE CONTROVERSIA CONTRACTUALES (AUTO APRUEBA O ACCEDE SOLICITUD DE TERMINACION DE PROCESO POR TRANSACCION)

⁵ Folio 149 del exp.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

SEGUNDA: PERJUICIOS QUE SE INDEMNIZACION. Los perjuicios que se indemnización por medio de este contrato son todos los perjuicios patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) extrapatrimoniales y demás tipologías que desarrolle la jurisprudencia, pasados, presentes y futuros, sufridos por el INDEMNIZADO, a consecuencia de los hechos descritos en la cláusula primera de este documento, así no se hubieren descrito expresamente.

TERCERA: MONTO DE LA INDEMNIZACION. Los INDEMNIZANTES reconocerán al INDEMNIZADO para efectos de resarcir la totalidad de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales sufridos en razón de los hechos ocurridos, la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE (\$2.627.000); cantidad ésta que acepta expresamente el INDEMNIZADO a título de reparación integral de los perjuicios derivados de los hechos objeto de este contrato.....

...(...)...

QUINTA: DECLARACION DE PAZ Y SALVO: EI INDEMNIZADO, manifiesta que la suma transada compensa totalmente los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales y demás tipología que desarrolle la jurisprudencia, presente, futuros y pasados causados a consecuencia de las lesiones sufridas con ocasión de los hechos objeto de e este contrato y a su vez declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto a LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.-POLICIA NACIONAL y a la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, como aseguradora de la sociedad antes mencionada en virtud de la póliza de Seguro de Automóviles No. 1010280.

SEXTA. En consecuencia, el INDEMNIZADO, no podrá iniciar o proseguir acción alguna en contra de las personas jurídicas mencionadas en la anterior clausula. (...)..."

OCTAVA: Teniendo en cuenta la manifestación expresa y voluntaria del INDEMNIZADO, de que ha sido indemnizado integralmente, con respecto a los perjuicios reclamados a los indemnizantes, desiste de cualquier acción civil, penal o administrativa en contra de LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- POLICÍA NACIONAL y a LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS comprometiéndose a radicar desistimiento de la acción contra las antes mencionada dentro del proceso de Reparación Directa que cursa ante el Juzgado Catorce (14) Administrativo del Circuito de Barranquilla, que se identifica bajo el radicado No. 08-001-33-33-014-2017-00669-00, por los hechos descritos en la cláusula primera de éste contrato. En caso de que el indemnizado no radique desistimiento contra LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- POLICÍA NACIONAL y a LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, éste documento debe entenderse como tal para que se sirva ante la autoridad, la actuación respectiva de terminación.

"(...)..."

Este Juzgado, en cumplimiento de lo establecido en las normas legales sobre transacción, contenidas en el artículo 312 del Código General del Proceso al que nos remitimos por disposición expresa del artículo 306 de la ley 1437 del 2011, pasa a revisar el contrato de transacción de la referencia, a fin de determinar si procede o no su aprobación.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Revisado el contrato de transacción suscrito entre el señor Joan Sebastián Hernández Ordoñez, en su calidad de representante legal de **La Previsora S.A. Compañía de Seguros**, llamada en garantía en el presente proceso, el abogado Alexander Gey Viloria Sánchez, actuando en calidad de apoderado de la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional-, y por otra parte los señores Jaime Alberto Dávila Suárez, en su calidad de demandante dentro del presente proceso y Juan Manuel Dávila Suárez, como su apoderado, encuentra el Despacho que tienen facultades suficientes para suscribir dicho contrato de transacción, puesto que en el poder otorgado por la demandada al mencionado apoderado⁶, entre las facultades que se otorgaron se encuentra la de transigir, ocurriendo lo mismo en relación al apoderado del demandante, de manera expresa se anota que tiene facultad para llegar a un acuerdo de transacción, cumpliéndose de esa manera con lo dispuesto por el artículo 179 de la ley 1437 de 2011, en relación a la autorización para transigir. Así mismo, se observa la nota de presentación personal de cada uno de los contratantes.

Es de recordar que el objeto de la figura procesal del “Llamamiento en Garantía”, es exigir de un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer el demandado, como resultado de una Sentencia.

Analizado el contrato de transacción, el Despacho advierte que el acuerdo suscrito por las partes, en el cual la entidad llamada en garantía y la demandada demandada Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional-, como indemnizantes, se comprometen a resarcir la totalidad de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales sufridos por el indemnizado, -para el caso el demandante Jaime Alberto Davila Suarez- derivados del accidente de tránsito ocurrido el día 6 de febrero de 2017, entre un vehículo de su propiedad y otro adscrito a la Policía Nacional, cancelando la suma de dos millones seiscientos veintisiete mil pesos M/cte (\$2.627.000,00), cantidad que el indemnizado acepta expresamente a título de reparación integral de los perjuicios derivados de los hechos objeto del contrato.

Igualmente, y como quedó transcrito en líneas anteriores, en la cláusula octava del contrato de transacción el demandante se compromete “...a radicar desistimiento de la acción contra las antes mencionada dentro del proceso de Reparación Directa que cursa ante el Juzgado Catorce (14) Administrativo del Circuito de Barranquilla, que se identifica bajo el radicado No. 08-001-33-33-014-2017-00669-00, por los hechos descritos en la cláusula primera de este contrato. En caso de que el indemnizado no radique desistimiento contra LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICIA NACIONAL y a la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, este documento debe entenderse como tal para que se sirva (sic) ante la autoridad, la actuación respectiva de terminación...” hecho que demuestra su conformidad con lo pactado y su voluntad de desistir del presente proceso.

Conforme a ello, no encuentra el Despacho que con dicho acuerdo transaccional se estén vulnerando los derechos subjetivos de la parte actora dentro del medio de control de reparación directa de la referencia, pues la declaratoria de responsabilidad en este evento, se pretende del ente demandado, quien llamó en garantía a su aseguradora, como tampoco se advierte un detrimento injustificado a la entidad pública demandada, por cuanto lo estipulado en el contrato de transacción guarda correspondencia con lo solicitado en las pretensiones de la demanda, esto es, el pago de los daños causados, tasados en \$3.257.000,00.

⁶ folio 155 del exp.



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Así las cosas, toda vez que el contrato de transacción fue celebrado válidamente entre las partes, pues consta por escrito, no causa detrimento injustificado al patrimonio de la entidad pública demandada, y se encuentra suscrito por las personas legalmente facultadas para obligar a las partes involucradas en el proceso de la referencia, el Despacho accederá a la solicitud de terminación del proceso por transacción, de conformidad con lo establecido en el artículo 312 del Código General del Proceso.

En aplicación a lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 312 del C.G. del P., el Despacho se abstendrá de condenar en costas a la entidad pública demandada, por cuanto las partes llegaron a un acuerdo sobre la totalidad de las pretensiones reclamadas en el proceso de la referencia sin que hubiesen hecho alguna manifestación frente a las costas del proceso.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Catorce (14º) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla,

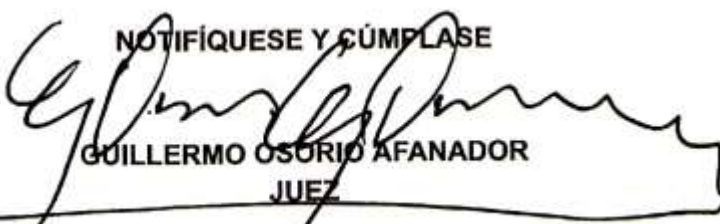
R E S U E L V E

PRIMERO.- ACCEDER a la solicitud de terminación del proceso presentada por las partes con ocasión a la celebración del contrato de transacción, por los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- DECLARAR terminado el proceso de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 312 del Código General del Proceso.

TERCERO.- No habrá lugar a condena en costas de conformidad con lo establecido en el inciso 4º del artículo 312 del Código General del Proceso.

CUARTO.- Una vez en firme esta providencia, por Secretaría archívese el proceso de la referencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO OSORIO AFANADOR
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRONICO
Nº 071 DE HOY 13/07/2020 A LAS 8:00 A.M.



ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL
ARTICULO 201 DEL CPACA